

Afrontar el anarco-capitalismo en Argentina

Del desconcierto a la restauración de umbrales y pilotos automáticos

Claudia Briones

■ Doi: 10.54871/ca25ac0e6

Propósitos

Hace un lustro, identificaba tres escenarios distópicos que planteaban crisis globales (Briones, 2019). A saber, los discursos de odio y las *fake news*, cuya circulación estaba siendo multiplicada y direccionada por la inteligencia artificial; el avance de las nuevas derechas que requería repensar lo que se venía catalogando y explicando de manera peyorativa como rasgos propios de distintos populismos; y los riesgos derivados de negar que vivimos en el antropoceno, acechados por inquietantes indicadores de profundización de la crisis climática. Veía entonces algunos de esos escenarios a más distancia que otros. Desde entonces, los tres se han encarnado de maneras muy crudas en Argentina.

En esto, el triunfo de Javier Milei ha producido cierta sorpresa, pero sobre todo desconcierto entre los opositores sobre cómo seguir, no tanto o no solo para afrontar sus dichos virulentos, sino para resistir iniciativas que vulneran lo que se pensaban eran acuerdos sociales más o menos estabilizados. Esto es, esos acuerdos

que instalan umbrales en la ciudadanía acerca de lo que resulta intolerable y que activan ciertos pilotos automáticos para acciones colectivas de repudio. Me refiero, por ejemplo, a la censura de las dictaduras cívico-militares y el terrorismo de estado, a la importancia asignada al sistema nacional de Ciencia y Técnica y a la educación pública en todos los niveles, a la reprobación a concesiones extremas a los grandes capitales.

Aún no está claro si y cómo se buscará socialmente afrontar las crisis de empleo, de ingresos, parlamentaria y de valores que se asocian a lo que el libertarianismo asume como su “batalla cultural”. En suma, diría que el país afronta nuevamente una crisis que se despliega en distintos niveles y que, sin embargo, –me arriesgaría a decir– curiosamente no parece estar siendo vivida como crisis por todos, como en otras ocasiones, aunque sí por algunos de nosotros. Arriesgaría también que por eso no se expresa aún a través de reacciones sociales de envergadura por parte de esa ciudadanía de a pie, que en otros momentos del país tomó las calles en ocasiones que sentía extremas o inadmisibles. Pienso, por ejemplo, en diciembre de 2001, cuando la declaración del estado de sitio opera de detonante y articulador de diversas protestas sociales en curso, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Ante lo que parecen ser efectos en principio paradójales del avance en Argentina de un proyecto que se autodefine como libertario y anarco-capitalista, se abren varias preguntas que requerirían investigaciones específicas y a escala. Solo intento aquí hacer un primer mapeo de qué puntos de partida podrían resultar apropiados para eso.

Preguntas

Creo en primer lugar que ya estamos en momentos de preguntarnos no tanto cómo fue posible que Javier Milei ganase las elecciones sino cómo, después de medidas de ajuste y maltratos varios,

aún conserva bastante apoyo popular y genera comparativamente escasas oposiciones cívicas colectivas.

De aceptar, con Jorge (2023), que estamos ante una crisis de la democracia ligada a la erosión de las instituciones representativas que se estaría manifestando a nivel global desde la mitad de la primera década de este siglo –crisis que iría de la mano de una polarización social y política tóxica y perniciosa–, ¿cuáles factores específicos fueron vehiculizando esa erosión y polarización en el país? ¿El descreimiento en la política y los políticos es mero resultado de las promesas que el horizonte nacional-popular no solo no cumplió sino con las que mostró un bajo compromiso real, o asistimos a una reformulación de la divisoria kirchnerismo/anti-kirchnerismo que pasa por fomentar lo que llamaría una especie de individualización de valores emancipatorios que antes se pensaban colectivos, en contextos donde el imperio del “sálvese quien pueda” parece ir justificando y reforzando la pérdida de cierta capacidad de sorpresa y reacción ante indicadores de autocratización?

Por último, respecto de la aparente falta de respuesta social ante medidas de ajuste que antes generaron fuertes oposiciones, ¿desde qué noción de crisis abordar algo que no se cataloga como tal de una manera socialmente masiva? ¿En qué y hasta dónde se han inhabilitado o se están redefiniendo los umbrales de lo “intolerable”? ¿Qué pilotos automáticos de la acción colectiva quedarán en pie o cuáles otros podrán emerger?

Diría que, ante este panorama, tenemos, antes que nada, dos desafíos. Por un lado, asumir problemas de diagnóstico, menos para desbrozar *fake news*, de modo de hacer un análisis de los efectos reales de la performance gubernamental, para ver si la aparente falta de respuestas colectivas depende solamente de estados de ánimo y sensaciones (sociedad estresada, embroncada, desconcertada), o involucra más bien transformaciones en los umbrales respecto de lo que se definen los “intolerables” e “innegociables” del pacto de la ciudadanía con sus gobiernos y, por ende, en lo que hasta el momento parecían ser pilotos automáticos para expresar

acciones colectivas de repudio que desborden los partidos políticos. Por otro lado, tenemos también el desafío de pensar cómo afrontar el anarcocapitalismo y el giro a las ultraderechas desde las ciencias sociales para lograr producir sentido de lo que seguimos viendo –o muchos de nosotros vemos– como intolerable e innegociable. Son los dos puntos que quisiera dejar planteados aquí.

Problemas de diagnóstico

Más allá de las discusiones políticas alimentadas por *fake news* desde posturas polarizantes, hay algunos datos objetivos sobre Milei presidente y los efectos de sus medidas. Sus manejos vienen demostrando que no es meramente un “loco” sin sustento político, sino más bien cabeza visible de un proyecto con perfiles nítidos. De todos modos, el problema de diagnóstico radica en que esos manejos se despliegan sobre campos tan distintos que los balances realizados –sean positivos o negativos– se polarizan, porque inevitablemente privilegian ciertos aspectos de modo muy parcial, ya sea según persuasiones ideológicas, o según cada cual se sienta personal o colectivamente afectado por las iniciativas desplegadas. Esta multiplicidad de campos involucrados hace que sea aún más difícil explicar un apoyo social que aún permanece bastante elevado, lo cual resulta paradójico sobre todo para quienes realzamos los aspectos perjudiciales y contradictorios de sus iniciativas. En esto, es por ende clave salirnos de la burbuja de críticas en que solemos vivir, para tratar de entender las bases y argumentos que coronan semejante apoyo.

De todas las medidas que van dando cuenta de la performance gubernamental hasta el momento, me concentro solo en tres campos que quizás sean los más visibles y socialmente ponderados. A saber, la política económica, el papel del estado y el estilo de comunicación pública de los actos de gobierno.

Primero, muchas de las explicaciones sobre el triunfo de Milei han hecho base en los deterioros y sufrimientos económicos que el país venía padeciendo, fundamentalmente la inflación, el consecuente quebranto de los salarios, la escalada del dólar, el endeudamiento público. Entre quienes destacan los logros del gobierno actual, está la ponderación positiva de la búsqueda del déficit cero, el desescalamiento de la inflación, la estabilización de dólares informales que vienen acortando la brecha con el dólar oficial, la baja del riesgo país, la disposición a honrar la deuda externa, un aumento, aunque magro, de las reservas.

Entre quienes advierten los costos y riesgos de la política económica, se enfatiza una estrategia centrada en recortes y ajustes del gasto público que han incrementado la pobreza y la indigencia, el desempleo y el deterioro de salarios y jubilaciones, las concesiones extremas a los grandes inversores y los sectores de ingresos más altos, ya sea levantando restricciones impositivas de modo selectivo, o bien otorgando oportunidades de blanqueamiento de capitales no declarados sin prácticamente costo alguno.

Curiosamente, no queda claro en qué medida es la clase social lo que lleva a juzgar estas iniciativas de manera positiva o negativa. Suele esgrimirse que la baja inflacionaria es valorada por los sectores populares que son, por otra parte, los más claramente castigados por ella. Cabría sopesar mejor en qué medida estaría influyendo la expansión de una informalización de la economía que pasa bajo el radar y que sería lo que permitiría explicar por qué condiciones objetivas de incremento de la desigualdad y la pobreza no generan mayor descontento y no hacen que se mine la esperanza ante promesas de repunte económico global para el país, sobre todo en 2025.

En lo que hace al papel del Estado, varias prácticas gubernamentales condicen con las afirmaciones de Milei de ser el “topo” que busca destruir el Estado desde adentro, aunque otras medidas parecen contradecir tales asertos.

Por un lado, la actual administración está promoviendo la suspensión de obras públicas, el recorte del empleo público en lo que hace a integrantes y sus salarios, como así también el de ciertas políticas que apuntaban a satisfacer mínimas medidas del estado de bienestar. Pero su ataque a movimientos sociales organizados es contrapesado por aumentos por encima de la inflación a la Asignación Universal por Hijo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días que asiste a los infantes en sus tres primeros años de vida. A su vez, la reducción del presupuesto y las inversiones en educación y salud y otros programas sociales contrasta con los incrementos para los Ministerios de Defensa y de Seguridad. Asimismo, recibieron incremento presupuestario muy por encima de la inflación la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación administrada por su hermana y la Jefatura de Gabinete.

Por otro lado, y a nivel de las instituciones representativas, algunos de los principales antagonistas que se enuncian como tales son los senadores y diputados obviamente opositores como encarnación supuestamente palpable de la muy denostada “casta política”. Como resultado de las elecciones, el partido de Milei cuenta con muy pocos legisladores propios. Incluso, por peleas internas, algunos de ellos han abandonado los bloques respectivos. Aun así, “transando” como saben hacerlo las más antiguas guardias partidarias –esto es, a través de supuestas concesiones personales o a los respectivos gobernadores de ciertos legisladores, o a través de acuerdos con las cabezas de partidos de la oposición– el gobierno ha logrado tres cosas no menores. A saber, negociar la aprobación de sus leyes, evitar la derogación de los Decretos de Necesidad y Urgencia, y vetar leyes promulgadas por ambas Cámaras reuniendo solo un tercio de las voluntades de los diputados, algunos de los cuales ya funcionan casi orgánicamente como integrantes del partido de gobierno a pesar de haber ser elegidos por partidos opositores.

Paradójicamente, la destreza propia o de su entorno para “negociar por debajo de la mesa” es algo que el presidente vincula con

“la casta”. A pesar de esto, no todas las lecturas sociales lo ven como algo censurable, porque todo esto va acompañado de intensas campañas por redes sociales y medios cercanos que justifican muchas veces con *fake news* las posturas del Ejecutivo. Además, suman a una imagen del presidente como alguien que “hace lo que dice”; “tiene decisión y determinación”; “está haciendo lo que se debía hacer” al batallar contra representantes que llevan años como tales, y de cuya honestidad se sospecha hace mucho por sus actos y duradera profesionalización.

El estilo de la comunicación pública de los actos de gobierno tanto *on* como *off the record*, a través de entrevistas con periodistas simpatizantes, reposteos y trolls en redes, o la misma Secretaría de Prensa apela a una polarización que se basa en una desbocada agresividad discursiva para denostar, amenazar y multiplicar enemigos, antagonismos y antagonistas. Más allá de la supuesta “casta política” en la que se basó su campaña, caen en esta categoría tanto ciertas instituciones y organismos tildados de inservibles o *partidarios*, como colectivos que reclaman derechos diferenciados ya reconocidos, y personas, sean legisladores, periodistas o cualquier presunto opositor, a quienes se censura o bien por corrupción, o bien por estupidez, incluidos eventualmente insultos claramente sexualizados.

Para algunos, el “estilo Milei” –que otros no ven contradictorio con el horizonte de “esperanza” que a la par propone– está crispando y estresando a la sociedad, y está subiendo el umbral de tolerancia a los improperios de maneras muy preocupantes. Creería, en cambio, que Milei ha dado voz pública y levantado censuras discursivas que estaban ahí antes y que limitaban la expresión a viva voz de distintos malestares y enojos, así como de intereses claramente sectoriales. En otras palabras, Milei habilita, recrea y a la vez potencia la explicitación soez y sin reparos de irritaciones y enfados que permanecían tácitos o circulaban en espacios marginales, a punto de que algunos no lo vean como impropio de un presidente, sino

como indicador de su autenticidad, y de su capacidad de animarse a decir lo que verdaderamente piensa.

Pero quizás lo que más sorprende y espanta es la libre circulación en ciertos medios y en redes de insultos y escarnios sobre temas que parecían consensuados en torno a la reprobación del terrorismo de estado o la ampliación de derechos de género y sexoafectivos así como, por cierto, los derechos indígenas. Es decir, consensos que parecían estabilizados –o al menos así queríamos creer– no lo estaban tanto.

Parte del desconcierto explicativo por ende surge de que quienes abogamos por esas cuestiones nos pensábamos mayoría, cuando ahora claramente quedamos acorralados e inanes frente a los ataques y hostigamientos por ahora solo discursivos, que generan mucha menos sorpresa y más apoyos colectivos de lo que debieran. Ante este panorama, debemos preguntarnos qué no supimos ni sabemos leer como cientistas sociales y qué no supimos ni sabemos comunicar.

¿Cómo afrontar el anarcocapitalismo y el giro a las ultraderechas desde las ciencias sociales para lograr producir sentido?

Como cientistas sociales, estamos en momentos en que concentramos nuestro arsenal crítico en señalar preocupaciones presentes y examinar retrospectivamente ciertos procesos sociopolíticos que explican parte del camino que nos condujo hasta acá. Poco hemos aún reconocido qué limitaciones de nuestra capacidad analítica han derivado en los desconciertos con que en muchos casos fue recibido el triunfo de Milei.

Aprendí varias cosas a partir de la forma en que los derechos de los pueblos indígenas empezaron a ser foco de ataque sistemático, sobre todo a partir de 2017, cuando su cuestionamiento se instala de manera bastante permanente a nivel nacional, en el marco

primero de la desaparición de Santiago Maldonado y poco después del asesinato de Rafael Nahuel durante el primer desalojo de la *Lof Lafken Winkul Mapu*, en las cercanías de Bariloche (Briones y Ramos, 2020). Las comparto porque creo que pueden dar pistas que aplican a otras temáticas que nos generan dudas y desconciertos, cuando podrían y debieran abrirnos caminos de investigación y explicación.

Primero, cuando por circunstancias coyunturales se reconocen constitucionalmente los derechos indígenas en Argentina, creo que confundimos la escasa repercusión del tema en la opinión pública con aceptación.

Segundo, subestimamos ciertas aprensiones y ofuscaciones que ya se expresaban localmente como fruto de trasnochados a cuyas acusaciones e insultos no valía la pena prestar demasiada atención, aunque son las mismas o equivalentes a las que luego se fueron instalando a nivel nacional y ahora Milei y sus funcionarios recrean y potencian.

Tercero, la licitud y legitimidad de los derechos indígenas nos parecía tan obvia, que la “batalla cultural” emprendida se centró más en lograr su implementación que en fundamentar las razones históricas, jurídicas y socioculturales que son el fundamento consensuado planetariamente para su reconocimiento.

Enfrascados en estas persuaciones, argumentaría que nos tomó por sorpresa la escalada racista, que nos lleva a que hoy no se cuestione solamente ya a ciertos indígenas considerados peligrosos, terroristas, “truchos”, sino a la misma necesidad de tener derechos indígenas y cumplir con los mandatos constitucionalmente. Casi nula preocupación pública generó el hecho de que la Cancillería argentina fuese la única en votar en contra de una resolución para proteger los derechos de los pueblos indígenas el 4 de noviembre de 2024.¹

¹ Argumentando paradójicamente que “La afirmación de la promoción de prácticas ancestrales puede dar lugar a la validación de tradiciones que podrían estar

Argumentaría también que son fallas que han operado en otros campos y que, en esto, la administración Milei ha sido mucho más explícita y perseverante en lo que paradójicamente también define como su “batalla cultural”, a pesar de los tintes gramscianos del concepto. Batalla que sistemáticamente emprende a través de distintos medios y tácticas contra la idea de “terrorismo de estado”, los derechos de género, las disidencias sexo-afectivas y los feminismos, el progresismo como categoría hoy derogatoria, ciertos artistas y medios de comunicación, e incluso la educación pública (Smink, 2024).

A estos respetos y aunque con distintas intensidades, creo que incurrimos en ciertos errores explicativos que podrían dar cuenta de la fragilidad de las batallas culturales emprendidas desde nuestras convicciones. Asumimos, por un lado, que existían acuerdos sociales más sólidos y ampliamente sedimentados de lo que efectivamente habrían estado. Tendimos incluso a cancelar precipitadamente objeciones a toda ampliación de derechos, objeciones que por ende quedaron latentes, cuando se debieran haber confrontado de modo abierto y constante, desde un debate público y democrático amplio. Más que realizar inversiones hegemónicas sólidas, pecamos en esto de cierta soberbia respecto de cuestiones que nos parecían obvias, pero no lo eran para muchos. Todo esto fue acompañado, claro está, por una serie de inconsistencias con respecto a cómo la sociedad política administró políticas en estos campos que,

encontradas con los derechos fundamentales de mujeres y niñas, o el derecho a la salud y acceso al progreso científico. El uso de terminologías ambiguas y amplias difículta y confronta con derechos humanos de garantía universal. Argentina celebra el respeto a la libertad religiosa y cultural de todas las personas, siempre en el marco de la universalidad de los derechos humanos para todos y quiere seguir contribuyendo y trabajando para que esa garantía sea realidad sin discriminación alguna” (*La Nación*, 12 de noviembre 2024). Digo “paradójicamente” porque tres días después el país vota en contra de otra resolución de la ONU que acordaba “intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas” (*Página 12*, 2024). Es decir que, en esta otra ocasión, la misma Cancillería abandona a las mismas mujeres y niñas que usó de excusa para ir en contra de honrar el compromiso con los derechos indígenas.

desde lógicas a menudo partidistas o polarizadas, no supimos/quisimos criticar lo suficiente de maneras públicas. Incurrimos también en cierto anacronismo, al asumir que valores y experiencias en torno a la Salud y la Educación pública forjados en otros momentos del país seguían formando parte de lo que cotidianamente vivenciaban en estos aspectos vastos sectores de la población como coordenadas definitorias de su ciudadanía.

No obstante, el tema de la educación pública es interesante, pues en torno a la defensa de las universidades nacionales (UU.NN.) se produjeron en todo el país durante abril y septiembre de 2024 las marchas más contundentes y multitudinarias contra medidas e injurias presidenciales. Y es interesante porque, por un lado, no siempre estudiantes, docentes y no docentes han alineado tan claramente sus demandas. Por otro lado, porque no siempre la sociedad acompañó como en estas ocasiones, por no ver en las distintas peticiones que se escenificaban un asunto que los involucrara. Pero la masividad de las marchas de abril y septiembre indica que allí hay nudos de significación cívica y societal que llevaron a reunir en las calles a quienes no se venían reuniendo. De alguna manera se puso de manifiesto un umbral de qué cosas aún resultan socialmente intolerables y activan a la ciudadanía de a pie a expresar su desacuerdo e indignación frente a la ruptura de ciertos acuerdos de convivencia.

Las explicaciones han sido varias. Frente a la afirmación presidencial de que las UU.NN. constituyen un subsidio a los ricos que pagan los pobres que no asisten a ellas, prontamente las propias casas de estudio circularon estadísticas que muestran que, a nivel país, el 40 % de los cursantes pertenece a los quintiles más bajos de la población y alrededor del 70 % es primera generación de universitarios en sus familias. En mi universidad –la Universidad Nacional de Río Negro– esas cifras ascienden al 47 % y 83 % respectivamente.

No sé si en medio de tantas *fake news* los números impactan realmente sobre ciertas convicciones. Lo que sí sé es que lo que

viene emergiendo en el debate público es algo que Grimson y Tenti Fanfani (2014) identifican como mitos sobre la educación y particularmente sobre las universidades, a favor y en contra de las mismas. Particularmente alguna de esas “mitomanías” se expresaron vívidamente entre quienes se manifestaron en abril y septiembre y muchos que no participaron, pero ejercieron su ciudadanía mediática (Winocur, 2002) opinando en radio, televisión y ciertas redes: mayormente la de que “la universidad por sí misma genera oportunidades de movilidad ascendente”.

A modo de ejemplo menos impresionista, lo cierto es que un estudio sobre las percepciones relativas a la movilidad social en el conurbano bonaerense realizado por la consultora Reyes y Filadoro –donde el 78 % del universo encuestado se percibía a sí mismo como integrante de la clase baja o media baja– muestra que el 94 % considera que la educación es muy (77 %) o bastante (17 %) importante como factor de progreso y apenas el 2 % piensa que no tiene importancia. Específicamente, respecto de la educación universitaria, el 63 % considera que un título universitario garantiza un mejor futuro (Schargrodsky, 2024).

La vitalidad de estas cifras nos abre varias preguntas, sobre todo porque operan en un contexto de deterioro de la educación argentina que nos habla de una muy baja performance educativa en las pruebas PISA a niveles primarios y secundarios –especialmente floja en los estudiantes de menores ingresos– así como de una escasa terminalidad del secundario que se traslada a las mismas universidades argentinas, donde se da la tasa de egresos más baja de la región. Por otro lado, pensar que la significación de la educación pública se mantiene incólume como coordinada de subjetivación cívica en el país no explica por qué los problemas que se expresan en la educación primaria y secundaria no han generado marchas equivalentes.

Por el momento, se me ocurre pensar que este apoyo a las UUNN. se vincula en parte con que para ciertas generaciones plantea un vínculo muy directo con su propia trayectoria de vida y con

que incluso resulta una experiencia transformadora que impacta en las subjetivaciones también de todo el entorno cercano de quienes acceden, pero no logran graduarse. Pero diría más aún.

Mientras los científicos sociales deconstruimos mitos de nacionalidad y de pertenencia que las derechas saben aprovechar, como señala Stuart Hall (1988), ciertos mito-motores resultan centrales para resistir proactivamente. Concretamente diría que esto es lo que ocurre con el de “M’hijo el doctor”, que ha prometido y parece seguir prometiendo la posibilidad de una movilidad social ascendente, menos como utopía que como derecho potencial a ser de “clase media”, incluso para sectores que no acceden a una educación de calidad y menos a las universidades nacionales. Paradójicamente, entonces, el mismo campo intelectual formado en UU.NN. que ha estabilizado la ampliación de derechos como parte de su horizonte hegemónico interno, pero no como sentido común societal incólume, puede acabar siendo defendido en su misma posibilidad de existencia incluso por quienes no acceden a las universidades y también por muchos que descreen de varios de los asertos de ese horizonte.

Llegados a este punto de la argumentación, reformularía en los siguientes términos los dos desafíos clave de los que partí para poder afrontar desde las Ciencias Sociales lo que, en este momento, al menos algunos, sentimos como crisis compartidas, como ciudadanos y como academia.

Primero, salir de la burbuja de críticas y escuchar atentamente. En palabras de Díaz Crovetto (2024), apuntar a no perder sintonía y buscar comprender los alcances morales que les permiten a las personas resonar con los discursos de odio y a menudo mendaces de las extremas derechas. Agregaría que si, como sostienen Laclau y Mouffe (1985), no es de manera automática que las subordinaciones se convierten en antagonismos, deberíamos además prestar seria atención a esas batallas por la significación que, al redefinir lo que cuenta como “necesidades e intereses” propios *sensu* Hall (1988), logran (re)articular antagonismos de modos no previstos. En

mi lectura, entonces, no perder sintonía requiere descartar dos lecturas apresuradas y tomar rumbos más desafiantes. Esto es, en vez de uniformar las razones del apoyo a una gestión o desecharlas *in toto* y de manera anticipada, debiéramos asumir que el panorama a explicar es más complejo, pues, según algunas encuestas, existen significativas diferencias entre los principios que defiende la administración Milei y las miradas sociales que al respecto tienen también algunos de sus votantes.²

Por último, pero no por ello menos importante, pensar muy seriamente cómo comunicar las convicciones sustentadas en nuestras investigaciones y formarnos en cómo hacerlo, identificando y reforzando incluso mito-motores valiosos para rearticular consensos, de modo que nuestros trabajos no resulten inanes ante las contrabatallas culturales que tenemos por delante.

Bibliografía

Briones, Claudia (2019). *Conflictividades Interculturales: Demandas Indígenas como crisis fructíferas*. Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara.

Briones, Claudia y Ramos, Ana (2020). Los porqués del “de acá nos van a sacar muertos”. Procesos de recuperación de tierras

² Tenemos indicadores de esto. Por ejemplo, la misma consultora Reyes y Filadoro afirma a partir de un estudio sobre las percepciones relativas a la movilidad social en el conurbano bonaerense que apenas el 38 % de los encuestados acordó con que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía y dejar que el mercado se autorregule, mientras que el 62 % se mostró en desacuerdo y el 72% se manifestó a favor de la protección estatal a los más vulnerables como herramienta de progreso (Schargrodsky, 2024). Pueden ser peculiaridades del conurbano, pero creo que cifras de otras regiones de Argentina no darían resultados extremadamente distintos.

en la Patagonia Norte. *Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas*, 9(17). 9-43. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/article/view/28918>

Díaz Crovetto, Gonzalo (2024). Repensar cruces y reconversiones antropológicas frente al giro global de la extrema derecha. *Publicar*, 23(36), 60-71.

Grimson, Alejandro y Tenti Fanfani, Emilio (2014). *Mitomanías de la educación argentina: Crítica de las frases hechas, las medias verdades y las soluciones mágicas*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Hall, Stuart (1988). The Toad in the garden: Thatcherism amongst the theorists. En Cary Nelson y Lawrence Grossberg (coords.), *Marxism and the Interpretation of Culture* (pp. 35-57). Urbana: University of Illinois Press.

Jorge, José Eduardo (2023). La democracia en crisis: desafíos y perspectivas. *Question/Cuestión*, 74(3), 1-35. DOI: <https://doi.org/10.24215/16696581e776>

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal (1985). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Londres: Verso.

La Nación (11 de noviembre de 2024). La Argentina fue el único país de la ONU en votar contra una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas. <https://www.lanacion.com.ar/politica/la-argentina-fue-el-unico-pais-de-la-onu-en-votar-contra-una-resolucion-sobre-los-derechos-de-los-nid11112024/>.

Página 12 (15 de noviembre de 2024). En la ONU, Milei eligió a sus rivales: las mujeres y las niñas. <https://www.pagina12.com.ar/782756-la-argentina-de-milei-es-el-unico-pais-que-se-pro-nuncio-en-l>.

Schargrodsky, Iván (15 de octubre de 2024). Off the record. Información, ideas y apuntes sobre política y justicia. *Cenital Newsletters*. <https://cenital.com/secciones/newsletters/off-the-record/>

Smink, Verónica (18 de marzo de 2024). 5 frentes de la “batalla cultural” que impulsó Milei en sus primeros 100 días como presidente de Argentina. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/articles/ce487p4zjq5o>

Winocur, Rosalía (2002). *Ciudadanos mediáticos: la construcción de lo público en la radio*. Barcelona: Gedisa.